

C.A. de Santiago

Santiago, doce de agosto de dos mil veintidós.

Poveyendo a los folios 12 y 13: A todo, téngase presente.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que, comparece Andrea Quinteros Saldías, abogada Defensoría Penal Pública, interponiendo recurso de amparo preventivo en favor de **Daney Muñoz León**, de nacionalidad colombiana, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber decretado su expulsión del país de manera ilegal y arbitraria mediante Decreto Exento N° 5081 de 30 de diciembre de 2021, solicitando se deje sin efecto la expulsión por ser contraria a derecho al afectar ilegal y arbitrariamente el derecho a la libertad personal del amparado.

Fundando el recurso sostiene que el amparado ingresó al país el 27 de enero de 2016, con el fin de mejorar su calidad de vida, comenzando a trabajar de manera inmediata como jornalero, para posteriormente, una vez concluidos sus trámites de regularización migratoria suscribió contrato, realizando distintas labores, cumpliendo con el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud.

Indica que el 29 de mayo 2019 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RUC 1900049000-0, RIT 265-2019, condenó al amparado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor del delito de conducción en estado de ebriedad, quedando sujeto al control del Centro de Reinserción Social Santiago Occidente por el plazo de 1 año, bajo el beneficio de Remisión Condicional de la Pena, dando cumplimiento satisfactoriamente a la medida según consta del certificado emitido por el Centro de Reinserción Social Santiago Sur de Gendarmería de Chile de 12 de enero de 2022 y resolución del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago de 13 de enero de 2022.

Sostiene que el 30 de diciembre de 2021 por Decreto Exento N°5081 se ordenó la expulsión del país del amparado, no obstante sus



antecedentes laborales y familiares como, asimismo, sus proyecciones en el ámbito educacional las que no ha podido concretar al mantener su situación migratoria de carácter irregular, por lo que no puede acceder a la educación superior a la que aspira.

Citando el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, el Decreto Ley N°1094 de 1975 y su reglamento, sostiene que autoridad no puede actuar fuera de los marcos de dicha normativa, porque entonces también se encontraría vulnerando el ordenamiento jurídico nacional, no obstante la decisión del Ministerio de expulsar al amparado resulta ilegal y arbitraria, amenazando su derecho a la libertad personal.

Afirma que la expulsión resulta arbitraria al no estar debidamente fundada y carecer de coherencia con el proceso de resocialización del amparado, toda vez que el decreto impugnado no precisa correctamente el fundamento o motivo que da lugar a tan drástica decisión de autoridad, toda vez que la fundamentación no se limita a señalar hecho y normas jurídicas sino que también a hacer un razonamiento sobre ellos que dé cuenta de cómo los hechos configuran el derecho invocado.

Asimismo la resulta ilegal al no fundamentar jurídicamente en el caso la facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de expulsar al amparado, que sería arbitrario al ser holgadamente desproporcionado y al expulsión sería ilegal por atentar contra el valor constitucional de protección de la familia previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita se declare que la expulsión materializada a través del mencionado decreto es ilegal y arbitraria, y disponiendo como providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho dejar sin efecto dicho acto administrativo.

**Segundo:** Que comparece don Julián Salvat Silva, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el



informe requerido y solicitando su rechazo en todas sus partes por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho que alega el amparado como vulnerado

Señala que, el 27 de enero de 2016 el amparado, de nacionalidad colombiana ingresó al país por paso fronterizo Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en calidad de turista.

Agrega que, mediante Resolución Exenta N°84279 de 3 de mayo de 2016, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó por primera vez al recurrente una visa de residencia temporaria por motivos laborales, la que fue prorrogada por un año más manteniéndose vigente hasta el 6 de junio de 2017.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 41363, de 7 de abril de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva realizada por el extranjero, y se otorgó, de forma subsidiaria, una visa de residencia temporaria, la que mantuvo su vigencia hasta el 25 de mayo de 2019.

Precisa que el 6 de junio de 2019, mediante sentencia dictada por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 265-2019, RUC 1900049000-0, el extranjero fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a la suspensión de su licencia de conducir por dos años, accesorias respectivas, y a una multa de una Unidad Tributaria Mensual, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con agravante de no tener licencia de conducir.

Sostiene que mediante Oficio Ordinario N° 25152, de 28 de octubre de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, remitido al domicilio indicado por el recurrente, se requirió al amparado que, en un plazo de 30 días, presentara a la Oficina de Partes de dicha autoridad los documentos que en la misma se singularizaron, no presentándose.



Afirma que el amparado el 28 de junio de 2021 solicitó acogerse al procedimiento de regularización extraordinario establecido en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325.

Agrega que Mediante Minuta N°2245, de 30 de septiembre de 2021, del Director del Departamento de Extranjería y Migración, recomendó al Sr. Subsecretario del Interior decretar la expulsión del recurrente, lo que se concretó a través del Decreto Exento N°5081 de 30 de noviembre de 2021, la que se encuentra firme y vigente, no siendo revocada mediante alguno de los recursos administrativos o judiciales establecidos en nuestro ordenamiento.

Añade que por Resolución Exenta N°22073095 de 21 de enero de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de regularización del amparado fue rechazada pro registrar una condena penal en el país, no constando en los registros abandono del país.

En cuanto a la normativa aplicable cita el Decreto Ley 1094 de 1975 y su reglamento Decreto N°597 de 1984, de lo cual expone que el mismo se dictó por autoridad competente y en uso de sus atribuciones legales, al concurrir la causal de expulsión, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley 1094 en relación con el artículo 15 N°1, 2 y 4, de la misma norma.

Señala que la autoridad tuvo en consideración al momento de determinar la expulsión del amparado, el delito cometido y sus circunstancias, en particular el conducir sin licencia y bajo la influencia del alcohol, lo que produjo que éste se cayera de la moto que conducía.

En cuanto al arraigo social y familiar alegado por el amparado, destaca que la medida migratoria no atenta contra el principio del Interés superior del niño, niña y adolescente, previsto y consagrado en el artículo 3.1 del Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 222 del Código Civil y el artículo 16 de la Ley 19.968, que busca proteger su desarrollo e integridad, por lo que no es aceptable argüir



este principio a fin de evitar medidas migratorias adoptadas en forma legal, ya que se desvirtúa el fin u objeto de la norma, más cuando el extranjero mostró total desinterés por cumplir la legislación nacional.

Concluye que la aplicación de la medida de expulsión es del todo legal y carente de arbitrariedad, pues el recurrente ha infringido la normativa interna migratoria, de modo tal que la separación del afectado con esa medida de su grupo familiar es una de las consecuencias que trae aparejada la decisión propia del actor de incurrir en la conducta ilícita, existiendo una causa legal que así lo permite y por la autoridad competente para decretarla.

Indica que no existe vulneración de los derechos cautelados mediante el recurso de amparo, toda vez que se ha dictado conforme la ley, dando cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por Chile.

**Tercero:** Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”*.

De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que *“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”*.



**Cuarto:** Que el acto impugnado, es el Decreto Exento N° 5081, de 30 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se decreta, la expulsión del territorio nacional del extranjero Daney Muñoz León, ordenándose su cumplimiento a la Policía de Investigaciones de Chile, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, para los efectos de su notificación y expulsión del país, a contar del momento en que sea notificado del Decreto.

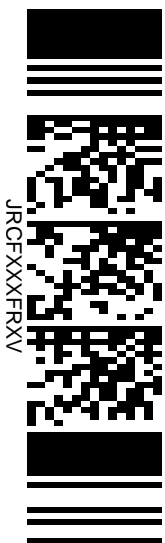
En este acto se hace presente su fundamento, consignando: “b) *Que, mediante Informe Policial N° 1.851 de fecha 31 de marzo de 2020, de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, se comunicó a este Departamento que el extranjero en mención fue detenido por el delito de conducción en estado de ebriedad con suspensión de licencia; c) Que, consta en sentencia definitiva de fecha 29 de mayo de 2019, del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, que el extranjero fue condenado en causa RUC N° 1900049000-0, RIT N° 265-2019, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 01 unidad tributaria mensual, a la suspensión de la licencia de conducir por el periodo de 2 años y a la accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con agravante de no tener licencia de conductor, sustituyéndose la pena por la remisión condicional por el periodo de un año; d) Que, mediante Oficio Ordinario N° 25.152 de fecha 28 de octubre de 2020., el extranjero fue citado por el Departamento de Extranjería y Migración de este Ministerio, a fin de informarle que se encontraba infringiendo las normas del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, del Ministerio del Interior, que Establece Normas de Extranjeros en Chile, y que presentara documentación suficiente a efectos de aclarar sus antecedentes judiciales junto con antecedentes de sus vínculos familiares y sustento económico en el país, sin que a la fecha se haya presentado en las oficinas de este Departamento ni*



*remitido la documentación solicitada; e) Que, la conducta ejecutada por el extranjero vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública y seguridad en el tránsito y las vías públicas, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por, el Estado, y cuya realización además, atenta directamente contra el bienestar común y orden social por lo que no es posible aceptar su permanencia en el territorio nacional; f) Que, es facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponer la medida de expulsión de los extranjeros que residan en el país”.*

**Quinto:** Que para resolver se tendrá en cuenta lo dispuesto especialmente en el artículo 91 N°8 del DL 1094, de 1975, que establece: *“Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las disposiciones del presente decreto ley y su reglamento. Ejercerá, especialmente, las siguientes atribuciones: N°8 Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o expulsión...”*.

Asimismo, su artículo 84 inciso 1° dispone: *“La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por Decreto Supremo fundado, suscrito por el Ministerio del Interior bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes.”*. Y en el artículo 90, del mismo cuerpo legal se previene que tal decreto de expulsión deberá ser notificado al afectado, quien podrá en el acto manifestar su intención de recurrir a la medida o conformarse con ella, y en este último caso la expulsión se lleva a cabo sin más trámite, estatuyendo en su inciso 1°, que transcurrido el plazo de 24 horas contado desde dicha notificación, en el caso de que no se haya interpuesto recurso o de no ser éste procedente, o transcurrido el mismo plazo desde que se haya denegado el recurso interpuesto, la

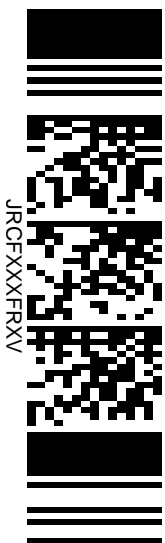


autoridad referida en el artículo 10 –Dirección General de Investigaciones- procederá a cumplir la expulsión ordenada.

Por su parte, el artículo 15 del citado Decreto dispone: *"Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: 1. - Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado; 2.- Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres; 3. - Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia por delitos no políticos. 6. - Los que hayan sido expulsados u obligados al abandono del país por decreto supremo sin que previamente se haya derogado el respectivo decreto."*

A su vez, el artículo 17 del Decreto Ley en comento, previene: *"Los extranjeros que hubieren ingresado al país no obstante encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 15 o que durante su residencia incurran en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 2, y 4 del artículo indicado, podrán ser expulsados del territorio nacional"*.

**Sexto:** Que, consta de los propios dichos del actor y los antecedentes acompañados, que fue condenado por delito de conducción en estado de ebriedad con agravante de no tener licencia de conductor, delito que está tipificado en nuestra normativa penal,





como tipo penal que afectan bienes jurídicos principales, como la seguridad y salud pública, ajustándose de esta manera, en su decisión, a un estándar de proporcionalidad atendida la entidad del bien jurídico vulnerado.

Por otro lado, es deber del Estado proteger el bienestar común y el orden social, en consecuencia, la medida adoptada no afecta el principio de *non bis in idem*, puesto que la expulsión tiene un objeto distinto a la sanción penal, considerando que ésta tiene por finalidad resguardar el bienestar común.

**Séptimo:** Que así establecidos los hechos y el derecho, en que se fundó el decreto de expulsión N° 5081 de 30 de diciembre de 2021, resulta menester, subrayar, que el amparado ha incurrido en una infracción al Decreto Ley N° 1094, al haber sido condenado por la comisión del delito, situación que ha sido acreditada por la autoridad mediante la sentencia respectiva, en consecuencia, el recurrido se encuentra legalmente habilitado para disponer su expulsión.

**Octavo:** Que así las cosas el Decreto de Expulsión en comento, se ajusta a lo dispuesto en las disposiciones del Decreto Ley N° 1094, ya reseñadas, el que establece que, en caso de infracción a alguna de las disposiciones establecidas en dicho cuerpo normativo, procede adoptar la medida que por este arbitrio se impugna.

En consecuencia, se estima que la autoridad administrativa ha dictado la decisión dentro del ámbito de sus competencias, además resulta fundada y concurriendo una causal de aquellas previstas en la ley, por lo que en caso alguno puede estimarse que su decisión resulte contraria a la Constitución Política de la República, arbitraria o ilegal, por lo que procede rechazar la presente acción.

**Por estas consideraciones**, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza**, el recurso de amparo interpuesto en favor de **Daney Muñoz León**, en



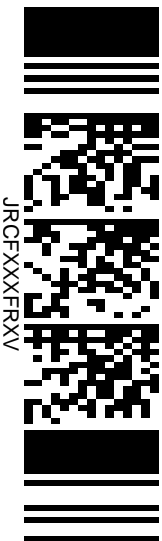
contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Servicio Nacional de Migraciones.

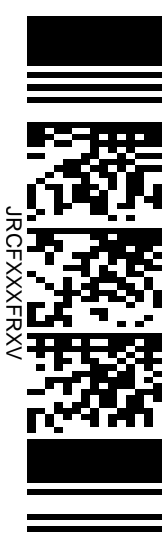
**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad  
N°Amparo-3124-2022.**

Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, señora María Soledad Melo Labra y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





JRCFXXXFRXV

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Maria Soledad Melo L. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, doce de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

